PROTESTAS CALLEJERAS: política represiva

José Hurtado Pozo

Las manifestaciones callejeras contra el gobierno fueron reprimidas severamente. La fuerza pública intervino de manera brutal, desproporcionada y letal. Resultaron alrededor de 50 fallecidos, entre ellos menores, mujeres y hombres, la mayoría por impactos de armas de fuego.

Esta reacción violenta de los responsables gubernamentales se inspira, sobre todo, en la idea de que debe conservarse el orden público por todos los medios indispensables. Formalmente, en el respeto de los derechos humanos y, en la práctica, conforme al principio de la proporcionalidad.

En este contexto, y respecto a las "protestas callejeras", deben comprenderse los argumentos expuestos por la Corte Suprema. Por un lado: "No se puede, so pretexto de reunión o disidencia (pensar u opinar distinto), justificar el impedimento, el estorbo o el entorpecimiento del transporte o la prestación del servicio público o privado...". Y, por otro, "La violencia contra las personas o las cosas y, específicamente, la toma de carreteras, vías o espacios de infraestructura de transportes públicos o privados no tiene cobertura constitucional. Tal situación, a la vez, afecta el sistema económico, que constituye la fuente generadora de riqueza y el sustento social".

Asimismo, la manera restringida, al punto de criminalizar sin más protestas públicas de índole política o social, como las señaladas inicialmente, de delimitar la legitimidad de los actos de manifestar en lugares públicos. Esto se deduce de sus afirmaciones que: "Si los ciudadanos estiman que no son suficientes sus reclamos o que, en todo caso, no existe recepción de parte de las autoridades o que los espacios de diálogo son ineficaces o inexistentes, están autorizados a acrecentar la vehemencia de dichos reclamos, siempre que ello repercuta en la esfera personal de derechos del protestante (verbigracia: huelga laboral o huelga de hambre) y no transgreda derechos fundamentales de terceros ajenos al conflicto social, como la vida, la integridad personal, la seguridad pública, el libre tránsito o la propiedad."

Nada de original tiene este discurso y práctica represiva, tanto en el país como en el extranjero, así como a lo largo de toda la historia republicana. Uno de los casos graves recientes es el que tuvo lugar en la década de los noventa, durante el gobierno de facto del fujimorismo. Actualmente, en Argentina, el nuevo gobierno conservador, ante previsibles protestas contra sus medidas económicas y sociales liberales, ha proclamado que va a recurrir a medidas duras contra las protestas callejeras: "Las calles no se toman. Que sepan que si se toman las calles, habrá consecuencias" y "Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz". De modo que, concluyen diciendo: "Para disolver protestas callejeras que bloqueen calles y rutas, se empleará la fuerza necesaria y suficiente, graduada en proporción a la resistencia, hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación".

Los partidarios de esta ideología y política represiva, cualquiera sea el ámbito de sus actividades y la orientación que asuman, deben tener en cuenta que es un arma de doble filo. No es difícil entender lo que sucede en España, donde el Partido Popular de derecha y su aliado Vox de

extrema derecha manifiestan diariamente su oposición a la elección del nuevo gobierno del Partido Socialista, aliado con partidos de izquierda e independentistas. Al mismo tiempo, proclaman su apoyo y simpatía al nuevo gobierno argentino.

En este sentido, algunos periodistas españoles se pronuncian: "La libertad para protestar es una de las grandísimas virtudes de la democracia. Y resulta paradójico observar cómo la derecha denuncia la llegada a España de una dictadura mientras aplaude a un presidente que se estrena limitándola en Argentina.

Fribourg, 18 diciembre 2023